ABC – 15 de Noviembre de 2.009

Pena de muerte: Industria en crisis en EE.UU.

¿Es concebible que EE.UU. llegue a abolir la pena capital por razones de índole económica? Hoy se sopesa si el país se puede permitir el inmenso gasto que acarrea. De esa trágica industria nos hablan un capellán y un abogado del corredor de la muerte que ya no soportaron más su trabajo

Corredor de la muerte en la cárcel de Lieber (Ridgeville) | ABC

Billy Joe se alegra de ser condenado

Hay quien aguarda la pena capital con horror y hay quien le ve el lado bueno o incluso picaresco. Son las contradicciones de esta carísima industria. Hay quien ha cometido tantos crímenes que cuando le pillan no le cabe duda de que pasará el resto de su vida en la cárcel. Y a veces, esa vida puede ser mejor si se está condenado a muerte.

Es por ejemplo el caso de Billy Joe Johnson, líder de una banda de defensores de la supremacía blanca condenado a muerte el mes pasado en California. Él recibió la noticia con indisimulado júbilo. El corredor de la muerte en California tiene 685 habitantes, de los cuales a duras penas se ejecuta a 13 cada año. Muchos de ellos fallecen por causas naturales mucho antes de que les «toque».

Y entre tanto, disfrutan de algunas ventajas: ocupan celdas individuales más grandes que las celdas para dos de los presos ordinarios, tienen televisor y CD para ellos solos, más acceso al teléfono y mejor régimen de visitas. Mientras, la factura sigue subiendo.

ANNA GRAU | NUEVA YORK

Esta semana, estando aún muy fresca la matanza de Fort Hood, el estado de Virginia ejecutó por inyección letal a John Allen Muhammad, el «francotirador de Washington». La ley considera probado que este hombre se dedicó a sembrar el terror disparando con mirilla telescópica a gente que iba a la gasolinera, al supermercado o al instituto. Durante tres semanas Washington pareció Sarajevo. Murieron diez personas.

Los asesinatos ocurrieron en 2002. John Allen Muhammad fue detenido casi de inmediato. En 2004 le condenaron a muerte. Le ejecutaron el pasado martes. Se negó a pronunciar unas últimas palabras y a que la prensa fuera informada del menú de su última cena, en la que el reo puede pedir lo que se le antoje, siempre que se pueda preparar en la misma cárcel o, según el estado, se pueda traer preparado de fuera por un coste no superior a cuarenta dólares.

El día antes de la ejecución las dos ex esposas del reo fueron entrevistadas en el programa de Larry King. La pena capital se cumplió en presencia de familiares de las víctimas.

Y ahora, atención, pregunta: ¿cuánto creen ustedes que cuesta este macabro circo? ¿Saben que todo el proceso para ejecutar a una sola persona cuesta por lo bajo tres millones de dólares —sin contar las exclusivas de Larry King—? ¿Saben que, a la vista de esas cifras, Estados Unidos, en plena crisis, empieza a preguntarse si se lo puede permitir?

Lo advierte un reciente y demoledor informe del Centro de Información Sobre la Pena de Muerte (DPIC, por sus siglas en inglés): el corredor de la muerte es literalmente la ruina para muchos estados de la Unión. California gasta cada año ciento treinta y siete millones de dólares sólo en gestionar penas capitales. Si la máxima pena fuera la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional este coste se reduciría a 11,5 millones al año. El estado de Florida, que acaba de recortar un 10 por ciento de su presupuesto para tribunales, gasta veinticuatro millones de dólares al año en cada ejecución.

Nueva Jersey gastó doscientos cincuenta millones de dólares en nueve años antes de decidirse a renunciar a la pena de muerte, al calcular que encarecía una media de diez millones cada caso penal de envergadura. Ídem en el estado de Nueva York. A lo largo de 2009 se ha debatido hacer otro tanto en las cámaras legislativas de once estados, incluida la muy «ejecutora» Texas. Finalmente, la abolición se aprobó en Connecticut y está en marcha en las

cámaras de Montana y Colorado. En Arizona se plantean privatizar todas sus cárceles, corredor de la muerte incluido.

Se calcula que desde el año 1976 hasta ahora la pena de muerte ha costado dos mil millones de dólares extra al sistema legal y penitenciario de Estados Unidos. Por supuesto, el mayor gasto no lo suponen las ejecuciones en sí sino todo lo que les rodea y conduce a las mismas. No se puede ajusticiar a nadie sin darle todas las oportunidades de recurrir y apelar (y aún así, muchos sospechan que no son garantías suficientes y que se ejecuta a inocentes). Esto supone un considerable dispendio en el mantenimiento del preso y en toda la «industria» que le rodea.

Hablamos de un complejo entramado que emplea a abogados, carceleros, médicos —como los que hace poco saltaron a la fama en Ohio porque, después de dos horas pinchándole venas a un reo, fueron incapaces de encontrar un hueco apto para la inyección letal— e incluso sacerdotes. Porque por supuesto hay sacerdotes cuyo trabajo es acompañar a los condenados a muerte... hasta la muerte.

Uno de los más famosos es el reverendo presbiteriano Carroll Pickett. Durante quince años fue el capellán de la cámara de la muerte de la prisión de Huntsville, en Texas. A lo largo de esos quince años no se le oyó una palabra más alta que la otra en contra de la pena capital. Pero, desde que se retiró, no hace otra cosa que combatirla incansablemente en libros, en conferencias y en entrevistas con ABC.

No es que antes el padre Pickett fuese un forofo del ojo por ojo. En absoluto. Aunque sí es cierto que, como muchos otros «ex profesionales» de esta industria, verla de cerca ha eliminado toda posibilidad de estar a favor, ni siquiera en los peores casos. Hace tiempo que el reverendo Pickett, a diferencia de otros sacerdotes norteamericanos que atacan el aborto pero defienden la pena de muerte, no admite excepciones en el derecho a la vida.

UNA SIESTA ANTES DE LA EJECUCIÓN

Por supuesto, allí dentro ha visto de todo. Reos que se derrumbaban en el último minuto —y con ellos, algunos de los guardias que tenían que escoltarles hasta el lugar de la ejecución— y otros que en cambio se echaban una sorprendente siesta y había que despertarlos para que no llegaran tarde a su propia muerte. Los hay que se confiesan atormentados por sus crímenes y lo que más temen es encontrarse con los familiares de sus víctimas viéndoles morir. Los hay que mantienen su inocencia hasta el final, en algunos casos de manera lo suficientemente convincente como para que el reverendo Pickett tuviera que apelar a toda su fe para no desesperarse.

«Creer en que hay vida después de la muerte te da fuerza en estos casos; te permite creer en que siempre habrá una justicia suprema, una última apelación», concluye. Pero se le nota que no quiere que el más allá se interprete como una excusa para las miserias de más acá. La vida eterna no justifica saltarse el no matarás. «Esto no es justicia ni es nada, y además no sirve para nada, no evita ni un solo delito», concluye el sacerdote.

No lo dice sólo la Iglesia. El DIPC cita los resultados de una encuesta realizada entre jefes de policía de todo el país. Sólo un 1 por ciento de los encuestados señalaron la pena de muerte como la mejor manera de reducir la criminalidad. Seis de cada diez jefes de policías norteamericanos creen que la pena de muerte hace muy poco para prevenir la criminalidad porque, dada la gravedad de los delitos a que se aplica, muy raramente sus autores tienen este factor en cuenta antes de actuar. Para decirlo de una manera muy moderna, la ley está en una «onda» y los criminales en otra. Incluso entre los responsables policiales que apoyan la pena de muerte, un 47 por ciento votaría por abolirla a favor de cadenas perpetuas y compensaciones a las familias de las víctimas.

Porque esa es otra: mientras el Estado gasta una fortuna en ajusticiar a criminales, muchas veces los afectados por estos crímenes (viudas, hijos y otras personas dependientes de las víctimas) quedan en la más absoluta indefensión o indigencia. ¿Y si se invirtiera menos en castigar y más en compensar? Por no hablar de que los 10 millones de dólares de media al año que se ahorra cada estado que elimina la pena de muerte permitirían contratar a doscientos cincuenta policías más. O a doscientos cincuenta nuevos maestros.

PROFESIONALES DEL «CORREDOR»

Por ejemplo a Tom Dunn, otro «ex profesional» del corredor de la muerte. Durante veinte largos, tremendos años, Dunn se dedicó a defender a condenados a la pena capital; es decir, a tratar de evitar por todos los medios que se les ejecutara. Después de tener un severo aviso médico —si seguía con este trabajo, el condenado a muerte sería él—, Tom Dunn lo dejó y es ahora profesor en el instituto de secundaria Martin Luther King Jr. de la ciudad de Atlanta.

Ese instituto no es lo que se dice el sueño de ningún maestro. Los que lo han visto dicen que tiene una arquitectura deprimente, propia de un entorno marginal. Y eso es lo que es exactamente: el 93 por ciento de los estudiantes son de raza negra, el 5 por ciento son hispanos y el 97 por ciento tienen derecho a comida gratis. Lo cual, en este contexto, lo dice todo.

Pero Tom Dunn va a trabajar silbando. No hay casi nada que ninguno de sus alumnos pueda hacer para desanimarle. Es como si él y el mundo hubieran vuelto a nacer: en lugar de trabajar a las puertas de la muerte lo hace a las puertas de la vida. En lugar de luchar por personas que ya han cometido errores irreparables y que tienen poca o ninguna salvación, pone toda la experiencia adquirida en estos casos al servicio de jóvenes que todavía tienen una oportunidad. «Es más fácil criar niños fuertes que reparar hombres rotos», afirma citando a Frederick Douglas, ilustre pensador y abolicionista americano.

Tom Dunn tiene muy claras las magnas dimensiones de la industria de la muerte. Y del alcance de sus víctimas, que incluyen no sólo al condenado sino a todos sus familiares y amigos. «Todos ellos sufren por la incertidumbre y, una vez la ejecución está fijada, por la absurda certeza de que tal día a tal hora su ser querido va a morir a manos de su propio gobierno; presenciar las visitas finales es increíblemente triste y te lleva a afirmar con toda convicción el derecho a la vida», rememora para ABC.

«Pero las víctimas de la pena de muerte también incluyen a los testigos de los juicios, a los jurados, a los agentes de policía, a los oficiales de los correccionales, a los fiscales, a los jueces, a toda la gente involucrada en el proceso que resulta en una ejecución», añade. «Muchos se dan cuenta entonces de que no pueden estar a favor de la pena de muerte, incluso si antes lo habían estado».

Llama la atención con cuanta cautela se pronuncia Dunn. La misma con que el padre Pickett administraba sus llamamientos a un despertar moral. Eran llamamientos muy suaves, eran casi súplicas. Hay que tener en cuenta que en este país, salvo en un período muy breve de los años 70, los partidarios de la pena de muerte siempre han superado a los detractores en todas las encuestas. A día de hoy siguen estando a favor un 64 por ciento.

Todos los activistas inteligentes contra la pena capital saben que no pueden entrar en el fondo de la cuestión. Que hay demasiada gente que, simplemente, ve bien matar a los que matan. Buscan entonces atajos morales, como el miedo a ejecutar inocentes. O consideraciones técnicas como la de que el gasto es excesivo.

¿Es concebible, sería presentable, que Estados Unidos llegara a abolir la pena de muerte por razones de índole económica?

Aunque, bien mirado, ¿no pasó un poco lo mismo con la esclavitud? Superado el primer susto, ni el padre Pickett ni Tom Dunn le hacen ascos a esta posibilidad. Dunn incluso recuerda que él mismo participó en el «experimento

de la pena de muerte» de Nueva York, cuando se declaró inconstitucional el estatuto de la pena capital en este estado, y se renunció a hacer uno nuevo por miedo a los costes. «Ese fue un día maravilloso», concluye Dunn.